



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C. veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020)

RADICADO:	11001-33-35-026-2019-00405-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JAZMÍN LIZETH MEDINA UBAQUE
DEMANDADA:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL

En el presente asunto, **JAZMÍN LIZETH MEDINA UBAQUE**, por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL**, con el objeto de obtener la declaratoria de nulidad de: 1) acta de junta medico laboral, No. 6018, del 21 de junio de 2018; 2) acta de tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, No. 77902, del 18 de diciembre de 2018; y 3) resolución 000051 del 15 de febrero de 2019, por medio de la cual se le retiró de la condición de cadete de la dirección nacional de escuela- escuela de cadetes de policía “General Francisco de Paula Santander”.

Pues bien, analizado el escrito de demanda, este Despacho, mediante auto del 28 de octubre de 2019, dispuso inadmitir la demanda toda vez que se encontraron falencias frente a los requisitos de admisibilidad.

En virtud de lo anterior, el Despacho concedió el término de diez (10) días de conformidad con lo estipulado en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que se subsanaran los defectos señalados, so pena de rechazo.

Atendiendo los defectos señalados por este Despacho, el apoderado judicial de la parte actora, presentó escrito de subsanación mediante memorial, el día 13 de noviembre de 2019 (fls. 114-125).

En virtud de lo anterior, procede el Despacho a pronunciarse respecto al escrito de subsanación presentado, con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES

Una vez analizado el escrito de subsanación allegado por el apoderado de la parte actora, el cual fue presentado dentro del término legal, concluye el Despacho, que

no es posible avocar conocimiento sobre la totalidad de actos demandados, en específico, respecto de: **1) acta de junta médico laboral, No. 6018, del 21 de junio de 2018; 2) acta de tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, No. 77902, del 18 de diciembre de 2018.**

Lo anterior, en razón a que para el Despacho, los referidos actas de Junta y Tribunal Médico de Revisión Militar, no contienen en estricto sentido, y para el caso concreto, la manifestación expresa de la administración **tendiente a crear, modificar o extinguir un derecho** lo que, en principio, daría lugar a un pronunciamiento inhibitorio, toda vez que tratándose de un aparente acto de trámite el mismo escapa al control jurisdiccional.

No obstante lo anterior, no puede pasarse por alto que la jurisprudencia de la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo ha considerado, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, que las referidas valoraciones médico científicas tiene la connotación propia de un acto administrativo definitivo, esto, siempre y cuando con ellas se imposibilite la continuidad de la actuación administrativa a través de la cual se persigue el reconocimiento o defensa de derechos.

Lo anterior, toda vez que ante la imposibilidad de continuar con la actuación administrativa, por la cual se pretende impedir la consecuencia final, que para el presente caso sería el retiro de la condición de estudiante, el interesado no cuenta con otro camino distinto que acudir a esta Jurisdicción para controvertir el contenido de las valoraciones, esto, con el fin de que el índice de pérdida de la capacidad laboral, previamente asignado, sea revaluado y, en consecuencia, se pueda atacar o solicitar la reconsideración del dictamen de “no apta para continuar con el proceso de formación”.

Al respecto, la **SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, mediante providencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017)**, recordó:

“Los actos expedidos por (...) el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos definitivos en la medida en que impiden seguir adelante con la actuación. (...).”

En las anteriores condiciones, no es posible exigir al interesado que a pesar de no alcanzar el porcentaje mínimo de incapacidad para tener derecho a la pensión de invalidez, acuda ante la entidad en procura de tal derecho, siendo en cambio procedente, ante la irrevocabilidad de tales actos, acudir en su demanda para que se estudie si estuvo bien fijado el índice lesional, y si además la pérdida de la capacidad es imputable al servicio, lo que conllevaría, en caso de ser favorable al actor, al reconocimiento de la prestación.

En conclusión, si el acto del Tribunal Médico Laboral impide continuar con la actuación en la medida en que no permite al afectado solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, no se le puede dar el calificativo de simple acto de trámite y en tal caso, es susceptible de demanda ante ésta jurisdicción (...).”

Si bien el caso puesto de manifiesto por el Consejo de Estado trata del reconocimiento de la pensión de invalidez, considera el Despacho, que tales argumentos pueden ser aplicados al caso que nos atañe, puesto que 1) se estudia la naturaleza de las actas de Junta y Tribunal Médico de Revisión Militar, y 2) la consecuencia de los determinados dictámenes médicos fue la expedición de un acto administrativo que extinguió y/o modificó derechos.

Así las cosas, al considerar las actas de **1) junta medico laboral, No. 6018, del 21 de junio de 2018; y 2) acta de tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, No. 77902, del 18 de diciembre de 2018**, como actos administrativos complejos, susceptibles de control jurisdiccional, estos deben ser sometidos al estudio del fenómeno de caducidad.

Al respecto, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2°, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda..La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

Visto esto, al analizar las fechas en que fueron proferidos los actos administrativos, se observa lo siguiente:

1. Frente al **Acta No. 6018, del 21 de junio de 2018**, notificada el 9 de julio de 2018, los 4 meses dentro de los cuales debería presentarse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, fenecían el 9 de noviembre de 2018.

2. Frente al Acta **No. 77902, del 18 de diciembre de 2018**, notificada el 19 de diciembre de 2018, los 4 meses dentro de los cuales debería presentarse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, fenecían el 18 de abril de 2019.

Así las cosas, y dado que la solicitud de conciliación prejudicial, la cual tiene la posibilidad de interrumpir dicho término, solo se presentó ante la Procuraduría General de la Nación, hasta el 13 de junio de 2019 (fl. 26), se puede concluir que frente a las predichas actas de **1) junta medico laboral, No. 6018, del 21 de junio de 2018; y 2) acta de tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, No. 77902, del 18 de diciembre de 2018**, operó el fenómeno de caducidad.

Corolario de lo anterior, este Despacho, **RECHAZARÁ LA DEMANDA**, respecto del 1) **acta de junta medico laboral, No. 6018, del 21 de junio de 2018;** y 2) **acta de tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, No. 77902, del 18 de diciembre de 2018, operó el fenómeno de caducidad.**

No obstante lo anterior, respecto de la **resolución 000051 del 15 de febrero de 2019, por medio de la cual se le retiró de la condición de cadete de la dirección nacional de escuela- escuela de cadetes de policía “General Francisco de Paula Santander”**, una vez analizado el escrito de subsanación, y verificado el cumplimiento de los requisitos legales tal y como lo dispone los artículos 162 y siguientes del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho dispondrá **ADMITIR** la demanda, en el ejercicio del medio de control propuesto.

En merito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

1.- RECHAZAR LA DEMANDA respecto del 1) **acta de junta medico laboral, No. 6018, del 21 de junio de 2018;** y 2) **acta de tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, No. 77902, del 18 de diciembre de 2018,** por las razones anteriormente expuestas.

Ahora bien, toda vez que se estipuló, que respecto de la **resolución 000051 del 15 de febrero de 2019, por medio de la cual se le retiró de la condición de cadete de la dirección nacional de escuela- escuela de cadetes de policía “General Francisco de Paula Santander”**, se dispondría **ADMITIR** la demanda, en el ejercicio del medio de control propuesto, para efectos de adelantar el trámite procesal ordena:

2.- Notificar personalmente la admisión de la demanda al señor Procurador Judicial de conformidad con el numeral 2° del artículo 171, artículo 197 y artículo 198 numeral 3° del C.P.A.C.A., y el artículo 612 del Código General del Proceso que modificó el art. 199 del C.P.A.C.A.

3.- Notificar personalmente la admisión de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con el artículo 612 del Código General del Proceso, incisos 6 y 7.

4.- Notificar por estado la admisión de la demanda a la parte actora, de acuerdo con el artículo 171 numeral 1° del C.P.A.C.A.

5.- Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija la suma de sesenta mil pesos (\$60.000,00.) M/cte, que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días, **en la cuenta corriente única nacional 3-082-00-00636-6** del Banco Agrario de Colombia, **“CSJ- DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN”**.

6.- Cumplido lo ordenado en los numerales precedentes, **Notifíquese Personalmente** la admisión de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el art. 199 del C.P.A.C.A., al **Ministro de Defensa**, o quien haga sus veces o ejerza tales funciones al momento de la notificación.

7.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1395 de 2010 y el párrafo 1° del artículo 175 del C.P.A.C.A., **la entidad demandada deberá aportar con la contestación de la demanda, el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso, todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso.** La omisión de este deber constituirá falta disciplinaria del funcionario encargado del asunto.

8.- Una vez cumplido el término señalado en el inciso quinto del artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, córrase traslado de la demanda a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término de treinta (30) días, atendiendo lo ordenado en el artículo 172 del C.P.A.C.A., y remítase de manera inmediata, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, a las mismas, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición.

9.- JAVIER ALEXANDER RODRÍGUEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 88.160.144 de Pamplona, y portador de la tarjeta profesional de abogado número 199893 del C. S. de la J., como apoderado de la parte actora, en los términos y para los fines del poder conferido visible a folios 122 y 125 del expediente.



10.- Se reconoce personería a **LADY JOHANNA ROMERO VEGA**, identificada con cédula de ciudadanía número 53.167.836 de Bogotá, y portadora de la tarjeta profesional de abogado número 214133 del C.S. de la J., de conformidad y para los efectos señalados en el poder obrante a folios 122 y 125 del expediente en calidad de apoderada sustituta de la parte actora, advirtiéndole para el efecto, que no podrán actuar simultáneamente con el apoderado principal dentro del presente proceso, tal y como lo dispone el artículo 75 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO

Juez

CA


JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA
Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior 25 DE FEBRERO DE 2020 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
 LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

